



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

JUZGADO DIECIOCHO LABORAL  
DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN

Medellín, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno

PROCESO	Acción de tutela
ACCIONANTE	Yolima Isabel Cabarcas Ovalle
ACCIONADO	Unidad Administrativa Especial Para La Atención Y Reparación Integral a las Víctimas. -UARIV-
RADICADO	Nro. 05001 31 05 018 2021 00368 00
INSTANCIA	Primera
DERECHOS INVOCADOS	Vida, igualdad y dignidad humana.
PROVIDENCIA	Sentencia Nro. 147 del 2021
DECISIÓN	Carencia actual de objeto por hecho superado

Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto 2591 de 1991, procede el Despacho a definir la viabilidad de la Acción de Tutela de la referencia.

#### ELEMENTOS FÁCTICOS

Manifiesta la accionante que es víctima directa del hecho victimizante de desplazamiento forzado, cabeza de hogar con un grupo familiar conformados por menores de edad, que actualmente se encuentra desempleada debiendo sufragar los gastos de arriendo, servicios y demás costas para el sustento de los suyos, encontrándose en un estado de vulnerabilidad debido a la situación que enfrenta, sin que la entidad accionada le haga entrega de las ayudas humanitarias o prorrogas a que tiene derecho.

Indica que es conocedora del derecho a la igualdad que se debe predicar con relación a las demás víctimas del conflicto armado que se encuentran en turno, sin embargo, pregona el derecho que le asiste a que se le indique una fecha clara y cierta para materializar de las ayudas de manera oportuna y razonable, por cuanto el estado de debilidad manifiesta que padece con los suyos le apremia un trato de especial protección por parte del estado. Por lo anterior, considera vulnerado sus derechos fundamentales a la vida, igualdad y dignidad humana.

#### SOLICITUD DE TUTELA Y DERECHOS INVOCADOS

Por lo anterior, solicita se tutelen los derechos fundamentales vulnerados, y se le ordene a la accionada que, de manera inmediata, entregue la ayuda humanitaria a que tiene derecho.

## RESPUESTA DEL ENTE ACCIONADO

A través de auto del 13 de septiembre de 2021, se admitió la acción de tutela, ordenándose la notificación y concediéndole a la entidad accionada el término de dos (2) días para que rindiera informe respecto de los hechos de la tutela.

Dentro de los términos conferidos para ello, la entidad accionada rindió informe indicando que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno, toda vez que, mediante comunicado radicado Nro. 202172030058261 del 14 de septiembre 2021, remitido al correo electrónico aportado en el escrito petitorio, se resolvió de fondo el derecho de petición instaurado por la accionante, en donde solicita el reconocimiento y pago de la ayuda humanitaria además, del reconocimiento de la medida de indemnización administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, en donde se le informa en primer lugar que la medida de indemnización administrativa fue elevada el 27 de julio de 2021, Radicado 4643843, fecha en la que se le comunicó que la Unidad cuenta con un término de ciento veinte (120) días hábiles para brindarle una respuesta de fondo en la que se indicará si tiene derecho o no a la entrega de la medida de indemnización administrativa, por lo anterior, se encuentra dentro del término de análisis de su solicitud, aclarando los requisitos que deben cumplir los soportes del certificado medico que pretenda hacer valer para ser priorizada la solicitud, so pena de entrar en la ruta general para la entrega y pago de la medida de indemnización administrativa, la cual se encuentra sometida a la aplicación del método técnico de priorización, razón por la cual la entidad esta imposibilitada para dar una fecha clara y cierta para el pago de la indemnización o asignación de turno y entrega de carta cheque, toda vez que la misma se encuentra supeditada a la aplicación del método técnico de priorización, según lo establecido en Resolución 1049 de 2019.

Por otro lado, en cuanto a la atención humanitaria solicitada, indica que el hogar de la accionante se encuentra dentro de la Ruta de Primer año de haber sufrido el desplazamiento forzado, por ende, las carencias se presumen. Siendo entonces así, la entidad a través de la RESOLUCIÓN No. 0600220213081850 de 2021, reconoció tres giros a favor del hogar, el primero de ellos consistente en UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.460.000) el cual fue cobrado por la accionante el 23 de abril del 2021, correspondiente a los componentes de alimentación, alojamiento temporal, vestuario, salud y educación para los miembros del hogar según corresponda; el segundo y tercer giro, será de NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE (\$990.000). poniendo de presente que el segundo giro se encuentra vigente para cobro desde el 13 de septiembre de 2021 en EFECTY - CUALQUIER PUNTO DE EFECTY UBICADO EN EL MUNICIPIO - HORARIO: LUNES A SABADO DE 8:00 AM A 5:00 PM, en Sincelejo - Sucre, advirtiendo que el giro estará disponible para el cobro durante treinta (30) días.

Por lo anterior, la entidad accionada solicita se nieguen las pretensiones invocadas por la parte actora, por considerar que ha actuado dentro del marco de su competencia, realizando todas las gestiones necesarias para cumplir los mandatos legales y constitucionales, evitando que se vulnere o ponga en riesgo derecho fundamental alguno.

#### TRÁMITE DE LA TUTELA

Una vez adelantado el trámite correspondiente, se observa que resulta procedente proferir la decisión de fondo, toda vez que, no se encuentra la existencia de irregularidad alguna que pueda invalidar lo actuado y este Despacho es competente para conocer de la acción de tutela impetrada, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y el Decreto 2591 de 1991.

#### PROBLEMA JURÍDICO

El conflicto jurídico se centra en determinar si como lo asegura la accionante se han vulnerado sus derechos fundamentales al omitirse dar respuesta al derecho de petición invocado, indicando una fecha clara y cierta para el pago de la medida de atención humanitaria a que tiene derecho.

Encontrándose en este asunto que se acreditó en el trámite de tutela, que se resolvió la petición con el lleno de los requisitos para entenderse eficaz y, en consecuencia, resulta procedente concluir que se está ante la existencia de carencia actual de objeto por hecho superado, sin encontrarse vulneración a derecho fundamental alguno; tal como pasa a explicarse:

#### CONSIDERACIONES

El artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1° del Decreto 2591 de 1991, señalan que procede la acción de tutela para reclamar la protección inmediata a derechos fundamentales ante la vulneración o amenaza de la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particulares que cumplan función pública. Un aparte de la norma es el siguiente:

“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces..., la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.  
(...)

La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.”

De acuerdo a la disposición antes citada, debe indicarse que la tutela es procedente ante cualquier entidad pública de cualquier nivel o de un particular en los casos señalados jurisprudencialmente, con el fin de solicitar la protección de los derechos fundamentales que se consideren amenazados o vulnerados por ellas.

Por su parte el derecho de petición, se encuentra contemplado en el artículo 23 de la Constitución Política, estableciendo lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.

A través de la Ley Estatutaria 1755 de 2015, se reguló lo concerniente al derecho de petición ante las autoridades y los particulares, así como los términos para resolver las distintas modalidades de peticiones en el artículo 14 de la siguiente forma:

“Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.”

Ahora bien, frente al derecho de petición, la H. Corte Constitucional, ha establecido una línea jurisprudencial a través de la cual se indica que la Administración o un particular ante una petición presentada por cualquier persona, tiene la obligación de brindar una respuesta pronta y de fondo, ya que de no existir esta obligación se haría nugatorio el derecho a presentar peticiones, es decir, no tendría objeto contar con la posibilidad de presentar peticiones, si a su vez no se tuviera la seguridad de que se va a obtener una respuesta.

La obligación de la administración va más allá de dar una respuesta, pues esta debe tener las siguientes características para que se considere efectiva: 1) ser oportuna; 2) resolver de fondo, con claridad y precisión lo que se solicita y 3) debe ponerse en conocimiento del peticionario; de manera que, si no se cumple con alguno de ellos, se vulnera el derecho fundamental de petición.

Sobre estos elementos configuradores del derecho de petición, la H. Corte Constitucional se ha pronunciado entre otras, en sentencia T-140 de mayo de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger, en los siguientes términos;

“(i) La pronta resolución constituye una obligación de las autoridades y los particulares de responder las solicitudes presentadas por las personas en el menor plazo posible, sin que se exceda el tiempo legal establecido para el efecto, esto es, por regla general, 15 días hábiles. (...)

(ii) La respuesta de fondo hace referencia al deber que tienen las autoridades y los particulares de responder materialmente a las peticiones realizadas. Según esta Corte, para que no se vulnere el derecho fundamental de petición, la respuesta debe observar las siguientes condiciones: a) claridad, esto es que la misma sea inteligible y que contenga argumentos de fácil comprensión; b) precisión, de manera que la respuesta atienda directamente a lo solicitado por el ciudadano y que se excluya toda información impertinente y que conlleve a respuestas evasivas o elusivas; c) congruencia, que hace referencia a que la respuesta esté conforme con lo solicitado; y por último, d) consecuencia en relación con el trámite dentro del cual la solicitud es presentada, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición elevado dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente.

(iii) La notificación de la decisión atiende a la necesidad de poner al ciudadano en conocimiento de la decisión proferida por las autoridades, ya que lo contrario, implicaría la desprotección del derecho de petición. La notificación en estos casos se traduce en la posibilidad de impugnar la respuesta correspondiente. Frente a este elemento del núcleo esencial de la petición, esta Corte ha explicado que es la administración o el particular quien tiene la carga probatoria de demostrar que notificó al solicitante su decisión, pues el conocimiento de ésta hace parte del intangible de ese derecho que no puede ser afectado”.

Igualmente, la Alta Corporación ha clarificado que la respuesta al derecho de petición resulta suficiente si se cumple con los requisitos anteriores, sin que se implique la aceptación de lo que se pide, pues la respuesta puede ser positiva o negativa; tampoco puede la administración exonerarse de la obligación de dar respuesta por falta de competencia de la entidad a la que se presentó la misma y cuenta con los términos establecidos en la Ley Estatutaria 1755 de 2015 ya indicados.

Todo lo anterior, ha sido explicado por la Alta Corporación, entre otras en Sentencia T- 077 de marzo de 2018, M.P Antonio José Lizarazo Ocampo, en los siguientes términos:

“1) El de petición es un derecho fundamental y resulta determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.

2) Mediante el derecho de petición se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos de acceso a la información, la libertad de expresión y la participación política.

3) La respuesta debe satisfacer cuando menos tres requisitos básicos: (i) debe ser oportuna, es decir, debe ser dada dentro de los términos que establezca la ley; (ii) la respuesta debe resolver de fondo el asunto solicitado. Además de ello, debe ser clara, precisa y congruente con lo solicitado; y (iii) debe ser puesta en conocimiento del peticionario.

4) La respuesta no implica necesariamente la aceptación de lo solicitado, ni se concreta necesariamente en una respuesta escrita.

(...)

9) La presentación de una petición hace surgir en la entidad, la obligación de notificar la respuesta al interesado”.

En lo que concierne al derecho fundamental de petición, como garantía de protección de las víctimas de desplazamiento forzado, la Corte Constitucional en Sentencia T- 112 de 2015, dijo:

“Ahora bien, en cuanto a la manera en que se le debe dar respuesta a las peticiones hechas por la población desplazada, la Corte ha señalado los criterios que debe tener en cuenta la autoridad responsable de su atención y reparación. En concreto se ha señalado:

Así, cuando las distintas autoridades reciban una petición proveniente de un desplazado, en la cual se solicite la protección de alguno de sus derechos, la autoridad competente procederá a: 1) incorporarlo en la lista de desplazados peticionarios, 2) informarle al desplazado dentro del término de 15 días el tiempo máximo dentro del cual le dará respuesta a la solicitud; 3) informarle dentro del término de 15 días si la solicitud cumple con los requisitos para su trámite, y en caso contrario, indicarle claramente cómo puede corregirla para que pueda acceder a los programas de ayuda; 4) si la solicitud cumple con los requisitos, pero no existe la disponibilidad presupuestal, adelantará los trámites necesarios para obtener los recursos, determinará las prioridades y el orden en que las resolverá; 5) si la solicitud cumple con los requisitos y existe disponibilidad presupuestal suficiente, la informará cuándo se hará efectivo el beneficio y el procedimiento se seguirá para lo reciba efectivamente. En todo caso, deberá abstenerse de exigir un fallo de tutela para cumplir sus deberes legales y respetar los derechos fundamentales de los desplazados.”

Debe tenerse en cuenta además que, a causa de la declaratoria del estado de emergencia, ordenada mediante el Decreto 417 de 17 de marzo de 2020, el presidente de la República en uso de sus facultades expidió el Decreto 491 de 28 de marzo de 2020, que establece en su artículo 5° la ampliación de los términos para atender las peticiones durante la vigencia de la emergencia sanitaria. De manera general, las peticiones presentadas durante la vigencia de la emergencia sanitaria o que estuvieran en trámite, debían tramitarse en el término de treinta días posteriores a su presentación y de treinta cinco días cuando de materias a cargos de la entidad receptora, debiendo informarse al peticionario cuando fuere posible la resolución de la misma dentro de ese término, así como la nueva fecha de respuesta.

Por su parte, el derecho al reconocimiento a la indemnización administrativa, está a cargo del Estado por intermedio de la Unidad para la Atención y reparación integral a las víctimas -UARIV- como una medida de Reparación integral o forma de compensación económica a las víctimas del conflicto interno armado, que busca en un principio ayudar a la reconstrucción del proyecto de vida de las víctimas que sufren entre otros hechos, el de homicidio, desaparición forzada, secuestro, desplazamiento forzado, entre otros. El reconocimiento de la indemnización está sometido a un procedimiento conforme a lo dispuesto por la H. Corte Constitucional en Auto 206 de 2017, en el que dispuso que la Unidad para las Víctimas en coordinación con el Ministerio de hacienda y crédito público, debía reglamentar el procedimiento que deben agotar las personas víctimas del conflicto armado para la obtención de la indemnización administrativa, con criterios puntuales y objetivos, buscando la garantía y protección de los derechos fundamentales al debido proceso y a la reparación integral; creándose con base en la orden Constitucional, la Resolución 01049 de 15 de marzo de 2019 que contempla cuatro (04) fases del procedimiento, a saber: I) Fase de solicitud de indemnización administrativa II) Fase de análisis de la solicitud. III) Fase de respuesta de fondo a la solicitud. IV) Fase de entrega de la medida de indemnización; una vez resuelta la solicitud como completa en la fase III, y para garantizar la entrega de que trata la fase IV, la Unidad procederá a aplicar uno de las siguientes rutas, teniendo en cuenta la realidad de las víctimas y su núcleo familiar;

- I. Ruta de Priorización: Mediante la cual serán atendidas víctimas que por razones de su edad, enfermedad o discapacidad se encuentran en una situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad dispuestos en el artículo 4 de la Resolución ibidem.
- II. Ruta General: A través de la cual se atenderán víctimas que no se encuentren con alguna de las situaciones descritas para acceder a la ruta priorizada.

Lo anterior, con el propósito de generar un puntaje que permita establecer el orden más apropiado de la entrega de la indemnización administrativa de acuerdo a la disponibilidad presupuestal que se tenga para cada anualidad. En consecuencia, los turnos para el

desembolso serán entregados a aquellas víctimas que de acuerdo a la aplicación del método obtenga un puntaje más alto, aquellas víctimas que no resulten priorizadas deberán esperar a que se aplique nuevamente dicha herramienta al año inmediatamente siguiente y así, hasta obtener el puntaje necesaria para acceder a la indemnización administrativa.

Por otro lado, en cuanto la atención humanitaria a las víctimas de desplazamiento forzado debe indicarse que el mismo se encuentra en cabeza de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, está fue creada como una atención humanitaria de emergencia y transicional a las víctimas de desplazamiento forzado con base en la evolución de los componentes de la subsistencia mínima, regulado por el Decreto 1084 de 2015 en sus artículos 2.2.6.5.1.1 y siguientes, que tiene como objeto un proceso de retorno o reubicación en lugar distiendo al de recepción o permanencia, cuya finalidad consiste en caracterizar la situación real de cada hogar víctima de desplazamiento forzado y con base en ello, acompañar a las familias en el acceso a los diferentes planes, programas y proyectos para garantizar el goce efectivo de los derechos de las personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad.

Las ayudas humanitarias de acuerdo al Artículo 2.2.6.5.1.7 ibidem, se entrega de acuerdo a los lineamientos de sostenibilidad, gradualidad, oportunidad, aplicación del enfoque diferencial y la articulación de la oferta institucional en el proceso de superación de la situación de emergencia.

Sobre el tema, la H. Corte Constitucional ha manifestado que la ayuda humanitaria es uno de los componentes prestacionales necesarios para la subsistencia de las personas víctimas del desplazamiento forzado, ya que su fin constitucional es precisamente mitigar y ayudar a suplir las necesidades básicas de alimentación, salud, atención psicológica, alojamiento, transporte, elementos de hábitat interno, salubridad pública y en general subsanar las difíciles condiciones materiales que enfrentan. En este sentido ha sostenido la Alta Corporación que la ayuda humanitaria hace parte del catálogo de derechos fundamentales mínimos de la población desplazada, advirtiendo que su entrega debe ser basada en los criterios de oportunidad y efectividad, sin que la persona que tiene derecho a ella, sea sometida a tramites dilatorios que haga ineficaz la prestación efectiva de los bienes y servicios que la componen, pues la situación de debilidad manifiesta en la que se encuentran estas personas impone sobre el estado la obligación de brindarles un trato especial, de carácter favorable, frente al resto de la población.

Por otro lado, el derecho a la igualdad, se encuentra contemplado en el artículo 13 de la Constitución Política que reza lo siguiente:

“Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”

Así mismo, la H. Corte Constitucional ha determinado que la igualdad es un concepto multidimensional que puede ser reconocido como un principio, un derecho fundamental o una garantía, que carece de contenido material específico, es decir, a diferencia de otros principios constitucionales o derechos fundamentales, no protege ningún ámbito concreto de la esfera de la actividad humana, sino que puede ser alegado ante cualquier trato diferenciado injustificado, por lo que debe entenderse a partir de tres (03) dimensiones; I) formal, lo que implica que la legalidad debe ser aplicada en condiciones de igualdad a todos los sujetos contra quienes se dirige; II) material, en el sentido garantizar la paridad de oportunidades entre los individuos; y, III) la prohibición de discriminación que implica que el Estado y los particulares no puedan aplicar un trato diferente a partir de criterios sospechosos contruidos con fundamento en razones de sexo, raza, origen étnico, identidad de género, religión y opinión política, entre otras<sup>1</sup>

Es por eso, que la H. Corte ha manifestado en reiteradas ocasiones la necesidad de un examen de validez constitucional de un trato diferencial entre dos sujetos o situaciones, que consiste en determinar si el criterio de distinción utilizado por la autoridad pública o el particular fue usado con estricta observancia del principio de igualdad, poniendo de presente que la misma puede ser descompuesta por cuatro mandatos, (i) un mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentren en circunstancias idénticas, (ii) un mandato de trato enteramente diferenciado a destinatarios cuyas situaciones no comparten ningún elemento en común, (iii) un mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes y diferencias, pero las similitudes sean más relevantes a pesar de las diferencias y, (iv) un mandato de trato diferenciado a destinatarios que se encuentren también en una posición en parte similar y en parte diversa, pero en cuyo caso las diferencias sean más relevantes que las similitudes<sup>2</sup>.

Respecto al hecho superado, ha de indicarse inicialmente que la H. Corte Constitucional, ha explicado a través de su jurisprudencia que en los casos en que hechos sobrevinientes a la acción de tutela varían significativamente el supuesto de hecho que

---

<sup>1</sup> Sentencia T 030 del 24 de enero de 2017. M.P Gloria Stella Ortiz Delgado

<sup>2</sup> Sentencia T-250 de 2012.

originó la solicitud de tutela, desapareciendo la razón de la acción, la necesidad de protección actual e inmediata de los derechos que se aduce son conculcados, situación que se ha denominado como carencia actual de objeto y que se ha dicho que, se presenta como hecho superado o daño consumado. El hecho superado se presenta cuando los actos que amenazan o vulneran el derecho fundamental desaparecen, por haberse satisfecho la petición presentada con la acción de tutela, lo que implica que ya no haya riesgo y en ese sentido no tiene razón de ser la orden a impartir por parte del juez, ya que no existe perjuicio por evitar. En cuanto al daño consumado, debe indicarse que se presenta cuando la vulneración o amenaza se ha producido y ha generado el perjuicio que se pretendía evitar con la acción, por lo que lo procedente es el resarcimiento del mismo y no emitir la orden para hacer cesar la violación o impedir que se concrete el peligro.

La Alta Corporación ha sido reiterativa al afirmar que, carece de fundamento emitir una orden en una Acción de Tutela, cuando se evidencia que ha cesado la conducta que amenaza o vulnera derechos fundamentales, así lo expuso en la Sentencia T-146 de 2012, con M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en los siguientes términos:

“...2.2.4. Hecho superado por carencia actual de objeto, reiteración de jurisprudencia:

Esta Corporación ha considerado que cuando hay carencia de objeto, la protección a través de la tutela pierde sentido y, en consecuencia, el juez de tutela queda imposibilitado para emitir orden alguna de protección del derecho fundamental invocado.

En la Sentencia T-988/02, la Corte manifestó que “(...) si la situación de hecho que origina la violación o la amenaza ya ha sido superada en el sentido de que la pretensión erigida en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha, la acción de tutela pierde eficacia y por lo tanto razón de ser.”

En este orden de ideas, se ha entendido que la decisión del juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, se encuentra que la situación expuesta en la demanda, que había dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acción, ha cesado, desapareciendo así toda posibilidad de amenaza o daño a los derechos fundamentales.

De este modo, se entiende por hecho superado la situación que se presenta cuando, durante el trámite de la acción de tutela o de su revisión en esta Corte, sobreviene la ocurrencia de hechos que demuestran que la vulneración de los derechos fundamentales, en principio informada a través de la instauración de la acción de tutela, ha cesado...”

## ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

En esta acción de tutela se solicita la protección de los derechos fundamentales a la vida, igualdad y dignidad humana, considerados atropellados ante la falta de comunicación por parte de la entidad accionada de brindar una fecha clara y cierta para

la materialización de la ayuda humanitaria que le fue reconocida, pretendiendo se ordene a la entidad materializar la misma de manera inmediata.

Por su parte, la entidad accionada rindió informe indicando que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno, toda vez que mediante comunicado radicado Nro. 202172030058261 del 14 de septiembre 2021, remitido al correo electrónico aportado en el escrito petitorio, se resolvió de fondo el derecho de petición instaurado por la accionante el 24 de agosto del año que cursa, en donde solicita el reconocimiento y pago de la ayuda humanitaria además, del reconocimiento de la medida de indemnización administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, indicando en primer lugar que la medida de indemnización administrativa fue elevada el 27 de julio de 2021, Radicado 4643843, fecha en la que se le comunicó que la Unidad cuenta con un término de ciento veinte (120) días hábiles para brindar una respuesta de fondo en la que se indicará si tiene derecho o no a la entrega de la medida de indemnización administrativa, por lo anterior, se encuentra dentro del término de análisis de la solicitud.

Por otro lado, en cuanto a la atención humanitaria solicitada, indica que el hogar de la accionante se encuentra dentro de la Ruta de Primer año de haber sufrido el desplazamiento forzado, por ende, las carencias se presumen. Por lo que mediante RESOLUCIÓN No. 0600220213081850 de 2021, se reconoció tres giros a favor del hogar, el primero de ellos consistente en UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.460.000) el cual fue cobrado por la accionante el 23 de abril del 2021, y el segundo giro por un valor de NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE (\$990.000) se encuentra vigente para cobro desde el 13 de septiembre de 2021 en EFECTY - CUALQUIER PUNTO DE EFECTY UBICADO EN EL MUNICIPIO - HORARIO: LUNES A SABADO DE 8:00 AM A 5:00 PM, en Sincelejo - Sucre, advirtiendo que el giro estará disponible para el cobro durante treinta (30) días.

Ahora, se extrae de la documentación allegada al despacho y que obra en el expediente digital, derecho de petición impetrado ante la entidad accionada el 24 de agosto de 2021 (ítem 2 del expediente digital, fl. 6) de donde se avizora solicitud de ayuda humanitaria urgente por estado de vulnerabilidad, así mismo se encuentra respuesta al derecho de petición con su respectivo comprobante de entrega (ítem 5 del expediente digital, fl. 6 y ss), de donde se vislumbra información clara y precisa sobre la fecha de colocación de la ayuda humanitaria que le fue reconocida, valor del mismo y lugar y horarios donde puede hacer efectiva su materialización, además, de indicar con claridad y exactitud el proceso en que se encuentra el trámite de reconocimiento de indemnización administrativa y los procedimientos que se surtirán en adelante para definir la ruta que se deberá seguir para el caso particular, advirtiendo los requisitos necesarios para acreditar una situación priorizada.

Como se indicó en precedencia, el derecho de petición apareja la obligación de la administración o particular, de brindar una respuesta oportuna, de fondo, con claridad y precisión, que debe ser puesta en conocimiento del peticionario o peticionaria, sin que ello implique que sea positiva, es decir, accediendo a las pretensiones de la parte, ya que puede ser negativa y con ello se estaría dando respuesta en los términos indicados.

Teniendo en cuenta lo anterior, debe advertir esta dependencia judicial que se dio respuesta a la petición invocada con el lleno de los requisitos para entenderse eficaz, evidenciándose además, que en el comunicado enviado por la entidad accionada, se da una lustración que, para el sentir de esta dependencia judicial, es clara y precisa, en primer lugar sobre los procedimientos administrativos y legales a surtir para poder materializar la indemnización administrativa, y en segundo lugar, indica fecha clara y cierta para materializar la prórroga de la atención humanitaria que le fue reconocida.

Así las cosas, en consonancia con lo anterior, advierte esta dependencia judicial que el objeto generador de la vulneración cesó, puesto que la entidad accionada indicó la información que dio lugar a la interposición de la presente acción, poniéndoselo en conocimiento al correo electrónico aportado en el escrito petitorio, por lo cual, se está frente al supuesto de carencia actual de objeto por hecho superado que torna inocua la orden judicial, como quiera que la situación que originó la presente acción constitucional ya desapareció y en consecuencia, tal como se explicó en precedencia, de esa forma se habrá de declararse.

Colofón de lo expuesto, no observa este Despacho, vulneración alguna a otro derecho fundamental, toda vez que se demostró en el trámite de tutela que la entidad accionada se ha ceñido al procedimiento establecido en la Resolución 01049 de 2019, Decreto 1084 de 2015 y las rutas de identificación de posibles situaciones de extrema vulnerabilidad, que garantiza de manera objetiva el derecho a la igual y el acceso a la indemnización administrativa o ayuda humanitaria, de cara a la realidad en que se encuentre cada grupo familiar víctima del conflicto armado, situación que además, garantiza el derecho al debido proceso. Así las cosas, ha de colegirse que la entidad no ha vulnerado derecho fundamental alguno, por lo que no se accederá a la tutela pretendida.

Finalmente, se ordenará notificar la decisión en la forma establecida por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, indicándose a las partes que la misma puede ser impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación y que, en caso de no impugnarse la acción, una vez el fallo alcance ejecutoria formal, se enviará lo actuado ante la H. Corte Constitucional a efectos de su eventual revisión.

## DECISIÓN

Por lo expuesto, el JUZGADO DIECIOCHO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República y por mandato constitucional,

## FALLA

PRIMERO. DECLARAR la existencia de CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO en la acción de tutela instaurada por la señora YOLIMA ISABEL CABARCAS OVALLE, en contra de la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS – UARIV, sin que haya lugar a tutelar derecho fundamental alguno, por las razones indicadas en las consideraciones.

SEGUNDO. ORDENAR la notificación de este fallo en la forma establecida en el Artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, advirtiéndole a las partes que el mismo puede ser impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

En caso de no impugnarse, una vez alcance ejecutoria formal, se enviará lo actuado ante la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ALBA MERY JARAMILLO MEJIA

JUEZA

IRI